

Plaza pública

para la edición del 18 de julio de 1995

Por la paz

Miguel Ángel Granados Chapa

Se extiende por todas partes en la república una tensión creciente, compuesta por violencias y desazones varias que muestran problemas sin resolver, lo que a su vez genera agresiones e inquietudes nuevas. Frente a ellas se requiere una mano firme que indique con claridad un rumbo, no una mano dura que se empuñe en señal de rigidez y sea capaz de asestar un golpe.

En Guerrero fluye de nuevo la sangre. En menos de tres semanas han sido asesinadas treinta y siete personas, todos caídos por disparos de la fuerza pública o de grupos organizados, con buen armamento. Más de la mitad de esos homicidios tienen un tinte político inequívoco, y en ellos está involucrado el propio gobernador del estado, ~~Rubén Figueroa~~ ^{Figueroa}. Al ^{Al} ^{mucho por} ~~inicio~~ ^{para} dos caminos se enfrenta a evidencias que denotan algún género de implicación. La alcaldesa de Atoyac de Alvarez, más colosista que perredista (en lo que hay que insistir para que se interprete correctamente su posición contraria al gobernador) insiste en divulgar su versión sobre un telefonema entre ella y Figueroa. En esa conversación el todavía titular del Ejecutivo guerrerense dijo que iba a detener a como diera lugar a quienes resultaron las víctimas del 28 de junio. Y, por otro lado, el operativo estuvo a cargo de un jefe policiaco que

debía haber sido suspendido en sus funciones, por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vista de sucesos violentos previos, recomendación que pasó por alto el gobernador.

El hervor social de que esa matanza, y las dos que le siguieron ya en el mes de julio, fueron una grave indicación, así como las secuelas de indignación que tales sucesos provocaron, fueron minimizados por el propio Figueroa. En la residencial presidencial, el mismo sitio en que quince años atrás su padre profirió amenazas contra el periodista Manuel Buendía, el segundo Figueroa ofreció un dictamen no se sabe si torpe o descarnado. En Guerrero no pasa nada, dijo. Luego ha querido aliviarse de los efectos de ese despropósito, diciendo que estipuló que "en este momento", el 11 de julio, no pasaba nada. Falta a la verdad, pues las grabaciones lo muestran diciendo la expresión desnuda, sin el matiz temporal. Y aunque lo hubiera fijado, su percepción no habría correspondido con la visión generalizada acerca de que algo, o mucho, está pasando en esa entidad, ese martes y cualquier otro día. Hasta la embajada norteamericana envió personal a averiguar lo que allí ocurre, atendida a normas diplomáticas cuyo ejercicio, formalmente admisible, entraña una desautorización al gobierno federal, cuya actitud pasiva parece corresponder al dictamen rendido por Figueroa.

De que algo, o mucho, está pasando en Guerrero dieron cuenta nuevos asesinatos ocurridos el viernes y el sábado anteriores. Un perredista del municipio de San Marcos, en la Costa Chica fue ultimado a balazos el 14

de julio. Y al día siguiente dos miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur, la agrupación agraviada con la matanza del 28 de junio, fueron también asesinados, en Tepetixtla mismo, el poblado que se cubrió de luto hace menos de tres semanas, pues de allí procedía el grupo que fue tiroteado por la fuerza pública de Figueroa.

Compañeros de estas víctimas recientes atribuyen a un grupo de choque, un escuadrón de la muerte prohijado por el gobierno local, la comisión de los dos homicidios de Tepetixtla. La procuraduría de justicia local ofreció una versión distinta de los hechos. Pero aun de corresponder con la verdad la dicha por el ministerio público, hay en ella una autoincriminación, inadvertida por supuesto. Según la Procuraduría, hace una semana

los hoy occisos asaltaron a la familia que ahora los ultimó. Y uno se pregunta si hay gobierno en una entidad donde las víctimas tienen que acudir a la venganza privada ante la incapacidad de las autoridades para proteger el patrimonio y la vida de las personas.

En la demanda de que Figueroa deje el gobierno no hay (lo supongo en general y lo afirmo por mi parte) un ánimo de convertirlo en chivo expiatorio. Nadie en sus cabales supondrá que los problemas de Guerrero (los que lo mantienen en el lamentable primer lugar de desnutrición, de pobreza y de homicidios por violencia), se resolverán como por encanto ante la salida del gobernador. Pero el que se vaya permitirá, por un lado, que se le inicie proceso por la participación que tenga en la matanza del 28 de junio, condición indispensable para

la imparcialidad del juicio, imparcialidad imposible si lo realizan sus dependientes. Pero sobre todo, será una muestra activa de respeto a la vida. No podrán alegar que la tienen presente como un alto valor a proteger quienes entiendan los asesinatos políticos como accidentes, y ostenten la tranquilidad de quien ve llover y no se moja.

Una forma coloquial de expresión, "dejarlo todo por la paz", es sinónima de renunciar, de no esforzarse por mantener una situación imposible. Figueroa debe irse, por cualquier vía. Debe dejarlo todo por la paz.

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

For la paz

En la demanda de que Figueroa deje el gobierno no hay un ánimo de convertirlo en chivo expiatorio. Nadie en sus cabales supondrá que los problemas de Guerrero (los que lo mantienen en el lamentable primer lugar de desnutrición, de pobreza y de homicidios por violencia), se resolverán como por encanto ante la salida del gobernador.



Se extiende por todas partes en la República una tensión creciente, compuesta por violencias y desazones varias que muestran problemas sin resolver, lo que a su vez genera agresiones e inquietudes nuevas. Frente a ellas se requiere, al mismo tiempo que la aplicación del derecho, una mano firme que indique con claridad un rumbo, no una mano dura que se empuñe en señal de rigidez y sea capaz de asestar un golpe.

En Guerrero fluye de nuevo la sangre. En menos de tres semanas han sido asesinadas treinta y siete personas, todos caídos por disparos de la fuerza pública o de grupos organizados, con buen armamento. Más de la mitad de esos homicidios tienen un tinte político inequívoco, y en ellos está involucrado el propio gobernador del estado, Rubén Figueroa. Al menos por dos caminos se enfrenta a evidencias que denotan algún género de implicación: La alcaldesa de Atoyac de Alvarez, más colosista que perredista (en lo que hay que insistir para que se interprete correctamente su posición contraria al gobernador) insiste en divulgar su versión sobre un telefonema, efectuado el 27 de junio entre ella y Figueroa. En esa conversación el Ejecutivo guerrerense dijo que iba a detener, a como diera lugar, a quienes resultaron las víctimas del 28 de junio. Y, por otro lado, el operativo correspondiente estuvo a cargo de un jefe policiaco que debía haber sido suspendido en sus funciones, por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vista de sucesos violentos previos, recomendación que pasó por alto el gobernador.

El hervor social de que esa matanza, y las dos que le siguieron ya en el mes de julio, eran una grave indicación, así como las secuelas de indignación que tales sucesos provocaron, fueron minimizados por el propio Figueroa. En la residencia presidencial, el mismo sitio en que quince años atrás su padre profirió amenazas contra el periodista Manuel Buendía, el segundo Figueroa ofreció un dictamen no se sabe si torpe o descarnado. En Guerrero no pasa nada, dijo. Luego ha queri-

do aliviarse de los efectos de ese despropósito. En la espléndida entrevista que le arrancaron Raymundo Riva Palacio y Ciro Gómez Leyva, aparecida en estas páginas el viernes y el sábado, quiso atenuarlo diciendo que al responder a la prensa, estipuló que "en este momento", el 11 de julio, no pasaba nada. Falta a la verdad, pues las grabaciones lo muestran diciendo la expresión desnuda, sin el matiz temporal. Y aunque lo hubiera fijado, su percepción no habría correspondido con la visión generalizada acerca de que algo, o mucho, está pasando en esa entidad, ese martes y cualquier otro día. Hasta la embajada norteamericana envió personal a averiguar lo que allí ocurre, atendida a normas diplomáticas cuyo ejercicio, formalmente admisible, entraña una desautorización al gobierno federal, cuya actitud pasiva parece corresponder al dictamen rendido por Figueroa.

De que algo, o mucho, está pasando en Guerrero dieron cuenta nuevos asesinatos ocurridos el viernes y el sábado anteriores. Un perredista del municipio de San Marcos, en la Costa Chica fue ultimado a balazos el 14 de julio. Y al día siguiente dos miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur, la agrupación agraviada con la matanza del 28 de junio, fueron también asesinados, en Tepetitla mismo, el poblado que se cubrió de luto hace menos de tres semanas, pues de allí procedía el grupo que fue tiroteado por la fuerza pública de Figueroa.

En menos de tres semanas han sido asesinadas treinta y siete personas en Guerrero, todos caídos por disparos de la fuerza pública o de grupos organizados, con buen armamento. Más de la mitad de esos homicidios tienen un tinte político inequívoco.

Compañeros de estas víctimas recientes atribuyen a un grupo de choque, un escuadrón de la muerte prohijado por el gobierno local, la comisión de los dos homicidios de Tepetitla. La procuraduría de justicia local ofreció una versión distinta de los hechos. Pero aun de corresponder con la verdad la dicha por el ministerio público, hay en ella una autoincriminación, inadvertida por supuesto. Según la Procuraduría, hace una semana los hoy occisos asaltaron a la familia que ahora los ultimó. Y uno se pregunta si hay gobierno en una entidad donde las víctimas tienen que acudir a la venganza privada ante la incapacidad de las autoridades para proteger el patrimonio y la vida de las personas.

En la demanda de que Figueroa deje el gobierno no hay (lo supongo en general y lo afirmo por mi parte) un ánimo de convertirlo en chivo expiatorio. Nadie en sus cabales supondrá que los problemas de Guerrero (los que lo mantienen en el lamentable primer lugar de desnutrición, de pobreza y de homicidios por violencia), se resolverán como por encanto ante la salida del gobernador. Pero el que se vaya permitirá, por un lado, que se le inicie proceso por la participación que tenga en la matanza del 28 de junio, condición indispensable para la imparcialidad del juicio, imparcialidad imposible si lo realizan sus dependientes. Pero sobre todo, será una muestra activa de respeto a la vida. No podrán alegar que la tienen presente como un alto valor a proteger quienes entiendan los asesinatos políticos como accidentes, y ostenten la tranquilidad de quien ve llover y no se moja.

Una forma coloquial de expresión, "dejarlo todo por la paz", es sinónima de renunciar, de no esforzarse por mantener una situación imposible. Figueroa debe irse, por cualquier vía. Debe dejarlo todo por la paz.

•••

CAJÓN DE SASTRE

Muestra de las desazones a que me refiero, en otro nivel y otro ámbito, fue el feo encaramiento habido el domingo en Morelia entre Carlos Castillo Peraza y algunos reporteros. Ningún profesional de la prensa podrá reprochar a los periodistas su insistencia en obtener respuestas, y aun de formular provocativamente las preguntas. Por igual, nadie puede negar a un político el derecho a guardar silencio. En el cruce entre ambas prerrogativas, las de un oficio y las de una persona, debe haber respeto, aun a las buenas maneras. Se entiende, por esas tensiones a que aludo, que esos modales hayan quedado destrozados, inicialmente por el líder panista, más gravemente por sus interlocutores. Más que el molesto incidente, lo importante es su causa, y en ella nos detendremos después.